

Enfrentar al COVID-19 más allá de la emergencia

Alcances desde las experiencias de la ILC América Latina

Por Zulema Burneo¹

La pandemia del COVID-19 ha tomado al mundo por sorpresa y a cada país en medio de procesos políticos y económicos particulares, que ahora determinan desafíos diferentes para enfrentar sus calamitosos efectos. En Chile, el COVID-19 llegó cuando se esperaba un plebiscito para una nueva Constitución tras meses de agitación social; en Guatemala, en medio de un cambio de gobierno marcado por intensas campañas para frenar la ola de violencia hacia los defensores/as de derechos humanos; en Bolivia, a la espera de una nueva elección presidencial tras una enorme crisis política; en Ecuador, tras la decisión del gobierno de ceder al pago de la deuda externa y de implementar nuevas medidas neoliberales para ajustarse a ello; y la lista sigue. En todos los casos, sin embargo, encontramos como denominador común a pequeños agricultores y agricultoras postergados de las políticas nacionales de desarrollo y de medidas que fomenten que el sector se fortalezca para abastecer la demanda interna de alimentos.

Con los impactos del COVID-19 este abandono se ha hecho más evidente, y se han prendido las alertas para enfrentar escenarios de inseguridad alimentaria tanto en sectores urbanos como rurales en el corto plazo. Los esfuerzos se vienen centrando en medidas que permitan destrabar los problemas en la cadena alimentaria y enfrentar una crisis económica que podría afectar el acceso a alimentos. El riesgo de ello es que desplazemos los esfuerzos dirigidos a generar cambios en las estructuras y en el sistema que ha permitido el desencadenamiento de esta crisis y nuestra escasa capacidad para afrontarla.

¹ Coordinadora regional de la ILC-ALC. El presente artículo ha sido elaborado sobre la base de los intercambios y aportes de los puntos focales de las plataformas nacionales y regionales de la ILC LAC: Esteban Sanjinés (TIERRA – Bolivia), Liliana Vargas (RENAF – Colombia), Javier Medina (CINEP/PPP – Colombia), Daniela Savid (F. Plurales – Argentina), Nicolás Avellaneda (F. Plurales – Argentina), Gabriel Seghezze (Fundapaz – Argentina), Martín Simón (Fundapaz – Argentina), Miluska Carhuavilca (SER – Perú), Marcela Alvarado (SIPAE – Ecuador), Selmira Flores (Nitlapan – Nicaragua), Freddy Pérez (Congcoop – Guatemala), Hernando Silva (Observatorio Ciudadano – Chile), Clara Merino (Movimiento Luna Creciente – Ecuador).

En este escenario, los miembros de la ILC han alertado del riesgo de centrar toda la atención en el problema de abastecimiento de alimentos sino se visibiliza a la par el problema del acceso a la tierra y al agua para los pequeños agricultores y agricultoras, así como la necesidad de una gestión adecuada de los recursos naturales de sus territorios, y de mecanismos que permitan su inclusión y participación en la definición de políticas. Ciertamente, repetiremos crisis como esta, si no reconocemos que vivimos en un mundo con recursos limitados pero con una población que crece indefectiblemente, y sino planificamos el uso de la tierra en consecuencia.

Es necesario tomar acción para generar las condiciones que permitan la permanencia en el campo, con activos y servicios suficientes para que la actividad agrícola sea una alternativa atractiva, rentable y sostenible. Ello implica regular la expansión de las actividades extractivas o la agroindustria ganadera o del monocultivo, que acaparan tierras, arrasado con inmensas áreas de bosques y generando largos daños ambientales y sociales. Asimismo, es necesario remirar las relaciones entre el campo y la ciudad, promoviendo nuevos circuitos económicos y arreglos políticos efectivos entre los territorios.

La ILC es una coalición de plataformas que trabaja por una gobernanza de la tierra centrada en las personas

Los miembros de la International Land Coalition (Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra) en América Latina –que impulsan un trabajo organizado en plataformas multiactores nacionales y de nivel regional– se han visto obligados a adaptar las acciones dirigidas a promover cambios de largo aliento para atender, a su vez, las necesidades emergentes por el nuevo contexto. A continuación se presenta una síntesis sobre los ámbitos de su trabajo que requieren una mayor atención, así como las medidas iniciales para actuar a la luz de la actual crisis desatada por la pandemia.

ÁMBITOS DE ALERTA

1. Cuarentena como mecanismo de control social y desatención a procesos políticos relevantes

En contextos especialmente violentos o represivos, o en países en permanente riesgo de conflicto social², las medidas de inamovilidad pueden ser utilizadas para frenar las iniciativas de la sociedad civil que proponen reformas al status quo y postergar los espacios de diálogo, así como para entorpecer la circulación de información y la transparencia en las decisiones de gobierno. Así, el control de la pandemia corre el riesgo de ser usado para fines de control social o para impulsar medidas que recorten

2 Se pueden mencionar los casos de Chile, Venezuela, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, entre otros.

derechos en temas que escapan largamente de una crisis sanitaria. En Guatemala, por ejemplo, destaca el desmantelamiento de la Secretaría de Asuntos Agrarios, encargada de atender los miles de conflictos por tierras que impiden a comuneros e indígenas desarrollar con seguridad sus labores productivas y garantizar la subsistencia de sus familias.

Más allá de los países en situación especial de conflicto, procesos políticos nacionales o regionales relevantes pueden ser desplazados de la atención de los gobiernos. Un caso particular a nivel regional es la firma del Acuerdo de Escazú, que mejoraría los niveles de información, transparencia y participación sobre cuestiones medioambientales así como la protección de los defensores y defensoras de la tierra, y cuyo proceso se ha visto postergado.

2. Riesgos a la vida de defensores y defensoras de la tierra y territorio

Colombia, Brasil y Guatemala son algunos de los países en donde se registran graves actos de violencia y represión hacia defensores y defensoras en los territorios desde el estallido de la pandemia. El confinamiento está siendo utilizado como carta blanca para la acción de grupos armados e ilegales que continúan ejerciendo control territorial ante una mayor ausencia de los aparatos de gobierno y de organizaciones que normalmente brindan protección a líderes sociales. Por otro lado, estos últimos son fácilmente identificables en sus viviendas y tienen mucho más difícil la movilidad en los casos en los que su vida está en riesgo.

Del mismo modo, cabe alertar sobre ciertas medidas aprobadas durante la emergencia que podrían perpetuarse como mecanismos de represión y persecución de líderes sociales en un contexto post- COVID-19. Es el caso de la norma aprobada en Perú que exime a militares y policías de responsabilidad penal y que podría dar paso a la impunidad en situaciones de violación a derechos humanos. Igualmente riesgosa es la posibilidad de geolocalizar a las personas, cuando éstas son defensoras de la tierra bajo amenaza.

3. Precarización de la economía familiar campesina e indígena y de la producción de alimentos

La agricultura en pequeña escala que realizan familias campesinas, indígenas y afrodescendientes de la región, enfrenta una serie de problemas en las diferentes etapas de la cadena de producción y comercialización. El COVID-19 llegó a la región con muchas tierras de cultivo listas para el periodo de cosecha, por lo que las primeras dificultades se relacionan con la comercialización de sus productos debido a la falta de transporte, el encarecimiento de fletes, el cierre de ferias locales, la ausencia de compradores habituales, o por los precios irrisorios que muchos intermediarios quieren pagar por ellos. Esta situación impacta sobre los pequeños productores de alimentos a lo largo y ancho de la región, y se traduce en la precarización de sus economías y en la afectación de la seguridad alimentaria de sus familias.

El impacto de esta situación sobre la vida en el campo podría empeorar en muy corto plazo si no se logran atender las necesidades para el nuevo periodo de siembra, con una adecuada dotación de semillas, abonos y mano de obra. Finalmente, en un escenario de depresión económica generalizada por el impacto del COVID-19, los mercados campesinos y sus economías se verán también afectados por una disminución de la demanda de alimentos a escala nacional.

4. Riesgos por la operación de industrias extractivas y agrícolas de exportación en el escenario actual y post – COVID-19

Los dos sectores que ejercen mayor presión sobre la tierra y el agua en los territorios rurales han continuado operando en algunos países de la región: las industrias extractivas y las empresas de monocultivo para la agroexportación. Dado que son sectores considerados de “interés nacional” por diversos gobiernos, estos no se han detenido por el impacto negativo que podrían generar en las economías nacionales. Esto ha sido extensamente criticado por los riesgos que constituye para sus trabajadores y trabajadoras, y para la expansión del virus en las poblaciones rurales aledañas, algo que empieza a observarse en Colombia, Ecuador y Perú.

Es en este punto en donde colisionan visiones y principios, en los que se debe optar por el crecimiento económico manteniendo el modelo extractivista o por el bienestar de la población. Los gobiernos, sin embargo, suelen ser muy cautos en no afectar las relaciones con la empresa privada y sus inversiones –más aun en países como Guatemala y Colombia en donde ambos son parte del mismo grupo de poder–, lo que ha derivado en políticas a su favor.

Un ejemplo es Colombia, en donde el gobierno impulsó procesos virtuales de consulta previa para pueblos indígenas en medio de la pandemia que darían lugar a que las operaciones en los territorios continúen. Con esta medida, que desconoce claramente la realidad de estos pueblos, no habría diálogo intercultural posible, contraviniendo totalmente el principio básico de dicho derecho colectivo³. Como esta, otras medidas podrían flexibilizar los actuales estándares sociales y ambientales que las empresas deben cumplir.

Los miembros de la ILC destacan también el riesgo que presenta un escenario post-COVID-19 de reactivación económica bajo este mismo modelo. Una arremetida extractivista o de la expansión de la agroindustria podría derivar en nuevos despojos de tierras, con los consecuentes daños ambientales y vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la población campesina.

3 La medida fue derogada finalmente en abril por presión de las organizaciones sociales.

ATENCIÓN A LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES

Los miembros de la ILC destacaron, dentro del conjunto de pequeños productores de alimentos y comunidades que dependen del uso de los recursos naturales, a aquellos que históricamente viven en una situación de mayor vulnerabilidad y que

ahora resultan también los más afectados: las mujeres rurales, los pueblos indígenas y quienes viven en zonas desérticas o semiáridas. Para estos sectores de la población, los problemas antes identificados se acentúan y se suman otros, muchas veces marcados por la discriminación y la violencia estructural. Como es lógico, a mayor superposición entre estas categorías, mayor afectación.

En este contexto, los **pueblos indígenas** se encuentran especialmente amenazados por su cercanía a las industrias extractivas que continúan operando. Ya sean empresas de hidrocarburos en la Amazonía o mineras de zonas andinas y costeras, la vida de los grupos étnicos corre peligro, más aun considerando la precariedad o inexistencia de servicios de salud en sus territorios o la falta de servicios básicos como agua potable y alcantarillado. De igual modo, la diversidad lingüística y la falta de acceso a medios de comunicación virtual entorpecen el acceso a información para fortalecer las acciones de prevención del contagio. Finalmente, la extensión de sus territorios y largas distancias hacia los centros urbanos complejizan la logística para hacer llegar los insumos y servicios para la prevención del virus o atención en casos de contagio.

En el caso de las **mujeres rurales**, la afectación se acentúa en tanto suelen ser las responsables de la comercialización de los productos de la chacra y de la alimentación familiar. Al encontrar dificultades para la venta de la producción, deben recorrer mayores distancias –que se pueden traducir en horas de caminata y mayor riesgo de contagio– para acceder a ferias en las que colocar sus productos y proveerse de otros. Pero en este contexto, lo que pone más en riesgo sus vidas no es el COVID-19 sino la violencia estructural que sufren, agravada por la situación de encierro y aislamiento, muchas veces, con sus propios agresores. Sus estrategias defensivas, como recurrir a organismos públicos y ONG que atienden sus casos, o simplemente salir de sus viviendas para buscar la protección en sus localidades se ven ahora disminuidas.

Finalmente, el caso de las **zonas desérticas o semiáridas**, que se caracterizan por ser marginales a las políticas públicas y presentan elevados niveles de pobreza, es particularmente alarmante. Los espacios semiáridos más vastos de la región se encuentran en el Chaco Trinacional (Argentina, Bolivia y Paraguay), en el nordeste de Brasil y en gran parte de Centroamérica (Corredor Seco Centroamericano). La ILC ALC apoya, a través de la plataforma Semiáridos de América Latina, a los pobladores rurales para mejorar su acceso al agua, que resulta tremendamente limitado tanto para el consumo humano como para la producción agrícola. En este contexto, el agua se vuelve más que nunca un recurso invaluable y un derecho urgente por reivindicar.

¿QUÉ HACER ANTE EL ACTUAL ESCENARIO?

La emergencia del COVID-19 se ha sobrepuesto a la emergencia en la que ya vivían los pequeños productores/as rurales, indígenas, campesinos y campesinas que a falta de atención, reinventan sus estrategias de vida cada día con una capacidad de resiliencia ampliamente reconocida. En ese sentido, quienes trabajan por promover un cambio en favor de este sector destacan que la mejor estrategia es fortalecer aquello que ya se venía impulsando desde la sociedad civil, aprovechando que hay una nueva ventana de oportunidad para ser escuchados. Ciertamente, hay cuestiones urgentes que atender pero, como se destacó al inicio, no se deben desplazar los problemas estructurales y las soluciones de largo aliento.

En adelante, se presentan algunas ideas para tomar acción en este contexto, a partir de las reflexiones y primeras experiencias de los miembros de la ILC.

1. Brindar apoyo a las iniciativas autogestionadas en los territorios desde la sociedad civil e incidir ante tomadores de decisión para su fortalecimiento

Un importante número de experiencias en toda la región viene desarrollándose en los territorios por iniciativa de las propias comunidades rurales y sus organizaciones. Éstas se han orientado a atender directamente el problema de acceso a información acerca del COVID-19 con distintas estrategias de comunicación, así como a su prevención a través de estrictos bloqueos de sus territorios. De otro lado, se ha generado una serie de iniciativas dirigidas a permitir la circulación de alimentos en circuitos cortos o locales, a través de una diversidad de estrategias como el trueque entre comunidades y municipios, canastas y transporte solidario de alimentos, ferias en puntos alternativos, comercio justo, etc. En algunos casos, éstas han logrado involucrar y ser apoyadas por los gobiernos locales, permitiendo un mayor alcance y beneficios para la población. De igual modo, hay un nivel de articulación con las ciudades para la venta de alimentos gracias a la acción de organizaciones de segundo o tercer grado y de ONG.

Los miembros de la ILC vienen fomentando y apoyando este tipo de iniciativas de dos maneras:

i) Respondiendo de forma directa a las nuevas necesidades, a través de la elaboración y difusión de protocolos y herramientas útiles para permitir la producción y comercialización de alimentos en condiciones seguras frente al COVID-19, o para la entrega de alimentos de ayuda humanitaria en territorios que vienen siendo controlados por autoridades indígenas y campesinas.

ii) Respondiendo con acciones de incidencia nacional o local, con campañas en favor de la agricultura familiar, visibilizando los desafíos que este contexto conlleva en cada etapa de la cadena alimentaria, generando información así como propuestas

concretas para su atención y adopción por parte de autoridades nacionales y locales. En el caso particular de los bloqueos territoriales por parte de las comunidades, se busca incidir a nivel de los gobiernos locales para el respeto de las medidas tomadas y el fomento de la coordinación a nivel comunal.

En 8 países de la región, la ILC promueve y facilita plataformas de coordinación multiactoral para mejorar la gobernanza de la tierra, la gestión territorial y promover la agricultura familiar campesina e indígena. Éstas deben ser aprovechadas para el intercambio de información, la toma de decisiones conjunta entre autoridades y organizaciones, y la coordinación de las acciones sobre el terreno.

2. Destacar el rol de las organizaciones sociales ante la crisis e incidir por su fortalecimiento como aliadas para el desarrollo

Muy vinculado al punto anterior, es necesario reconocer el rol de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes en este contexto de crisis y bajo riesgo de contagio, vienen desplegando una serie de acciones que permiten controlar la expansión del virus y brindar alternativas de subsistencia a las familias.

Su existencia se vuelve crítica en contextos de crisis, y un alivio para gobiernos nacionales y locales, al facilitar una serie de servicios sin los cuales se requeriría una mayor inversión para alcanzar a la población más pobre y desconectada de los núcleos urbanos del país. Todo ello debería llevarnos a incidir con más fuerza a mediano y largo plazo por programas dirigidos a fortalecer a las organizaciones sociales, y fomentar su participación como aliados para el desarrollo a niveles locales, regionales y nacionales.

3. Identificar y poner en marcha nuevas estrategias para relacionarse con las comunidades y evitar la desconexión

Las restricciones de movilidad y la brecha digital que aún persiste con las áreas rurales han obligado a los miembros de la ILC a retomar herramientas de comunicación, como la **radio**, para hacer llegar mensajes e información clave para promover su participación en distintos espacios de coordinación. Del mismo modo, se está considerando el trabajo con grupos de **jóvenes y promotores rurales** para que sean amplificadores de la voz de las comunidades hacia las organizaciones de sociedad civil en otros territorios y en la ciudad, y transmitan información relevante en sus localidades. Evitar romper la comunicación es especialmente relevante en zonas de riesgo de violencia a causa de actores armados.

4. Desarrollar mecanismos de vigilancia y alerta ante amenazas de violación de derechos humanos de defensores y defensores de la tierra y el territorio

A pesar de las dificultades para mantener activos todos los mecanismos de vigilancia

y protección de defensores y defensoras, los miembros de la ILC que operan a **nivel local** mantienen activas sus redes de información y de denuncia. A nivel de **políticas nacionales**, se viene haciendo seguimiento y denunciando públicamente las medidas que podrían afectar la labor o poner en riesgo a los defensores y defensoras, incluso en un contexto post-COVID-19 y particularmente cuando se activen los conflictos socio ambientales. A **nivel regional**, una base de datos para el monitoreo de casos de violaciones a derechos humanos se ha puesto en marcha en coordinación con otras redes globales.

5. Promover políticas y acciones que atiendan los problemas del territorio de manera integral

El contexto del COVID-19 visibiliza una serie de problemas que coexisten en el territorio pero que no pueden desconectarse si queremos salir de la crisis y no tener recaídas en el corto plazo. La apuesta por atender a los sectores rurales debe buscar un desarrollo rural integral, con enfoques que consideren la complejidad e interacciones entre los territorios.

Se han hecho más evidentes los vínculos entre el campo y la ciudad, la multifuncionalidad de la agricultura familiar, el papel del mundo rural para la juventud que migra y retorna a la tierra en búsqueda de alternativas, el rol que pueden cumplir gobiernos y organizaciones locales cuando hay posibilidades de diálogo y participación, etc. Todo ello debería significar una oportunidad para repensar las alternativas para el desarrollo en el campo de manera coordinada, intersectorial y partiendo de observar las dinámicas de territorios vivos, con identidades y necesidades diversas.

6. Incidir sobre la cooperación internacional y organismos multilaterales para la atención de la crisis sin perder de vista los ODS y su integralidad

Como ya ha sido destacado por los especialistas, el impacto del COVID-19 en la economía mundial y sobre la pobreza será enorme. Los más vulnerables lo seguirán siendo en medio de una crisis global que posiblemente genere más desigualdades tras el levantamiento de las restricciones para la operación de todos los sectores productivos. La cooperación internacional y los organismos multilaterales tienen un importante papel que cumplir en este proceso, orientando sus medidas y recursos para evitar acrecentar más las brechas, buscando equilibrar la inclusión social, el desarrollo económico y la protección ambiental, como plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “No dejar a nadie atrás” implicará trabajar con estrategias de urgencia y de largo plazo, siempre poniendo por delante la vida y el bienestar de todas las personas.

Desde la ILC ALC, se desarrollarán acciones de incidencia para no perder de vista este enfoque, promoviendo la generación de información y el monitoreo de indicadores y metas que corren el riesgo de ser postergados ante la crisis de salubridad, pero que se encuentran a la base del bienestar de la población más vulnerable.